

Otro grupo de profesores se ocupa, en tercer lugar, de conflictos armados concretos —algunos de ellos de difícil clasificación— de reciente aparición (Georgia, Kosovo) y otros excesivamente longevos (árabe-israelí). Este último es tratado con absoluta prudencia por R. Bermejo García, si bien profundizando con rigor sobre esta cuestión con el único fin de intentar ampliar, pese a las dificultades existentes derivadas de la discutible naturaleza jurídica del conflicto, el ámbito de aplicación de las normas del Derecho Humanitario Bélico para buscar la protección del mayor número de personas. A. Remiro Brotóns presenta por su parte un estudio muy crítico sobre el uso de la fuerza desplegado en Yugoslavia por la OTAN en el conflicto de Kosovo, planteándose incluso de manera muy acertada la cuestión de si estamos en presencia de un proceso de *desuetudo* de la Carta de Naciones Unidas: un instrumento jurídico internacional que para el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid puede ser mejorado pero que nunca debe ser arrinconado bajo ninguna excusa. Por último, el profesor A. Blanc Altemir examina el papel que han desempeñado diversas organizaciones internacionales (ONU, OSCE, CEI, OTAN) en la solución de los conflictos de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, en donde se ha podido comprobar la ausencia de coordinación entre ellas pese a compartir principios e ideas comunes.

Otra importante contribución, por último, es la que nos ofrece el Coronel Auditor F. Pignatalli y Meca sobre los avances logrados en la represión de las infracciones del Derecho Humanitario ante la creación de la Corte Penal Internacional. Un extenso trabajo centrado en el a su vez extenso artículo 8 del Estatuto de la Corte relativo a los crímenes de guerra en el que queda plasmada sin duda su experiencia como miembro de la Conferencia Diplomática de Naciones Unidas que vio nacer este importante Tribunal.

En suma, estamos ante un trabajo de referencia en la materia que va a servir para actualizar todo este amplio sector del ordenamiento jurídico internacional que se esconde bajo la rúbrica de Derecho Internacional Humanitario, en un momento histórico además que demanda con urgencia la progresiva adaptación de los viejos esquemas sobre los que se asienta. Y es que si esto no se hace se corre el peligro de amparar el desarrollo de ciertas actuaciones unilaterales que impidan llevar a efecto la misión última de estas normas: el respeto de la dignidad de la persona y la protección de las víctimas en estos nuevos conflictos armados.

Enrique J. Martínez Pérez  
Universidad de Valladolid

ROBERT, Sabrina: *L'Érika: responsabilités pour un désastre écologique*, Pedone, Paris, 2003, 259 págs.

---

El principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 consagra que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo

dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Si se aplica este principio al ámbito marítimo, nos encontramos en la actualidad —como señala el profesor Alexander Kiss— ante una lucha partisana entre quienes buscan la prevención por parte de los Estados de cualquier daño causado por vertidos tóxicos en el mar y quienes intentan imponer, por todos los medios, la más plena libertad comercial en el transporte marítimo. El citado profesor considera en el prefacio de esta obra que su autora, Sabrina Robert, ha sabido reflejar perfectamente, y con gran acierto, el antagonismo latente entre estas dos concepciones, enfrentándose sin temor al estudio y análisis de la responsabilidad por daños ecológicos causados por el vertido de hidrocarburos en el mar. Esta obra no podía ser más oportuna y actual. Por una parte, todos sabemos cómo el naufragio del Erika no ha sido ni la primera ni la última mancha negra en el mar y cómo aún queda mucho por hacer para alcanzar una normativa nacional e internacional que garantice la máxima seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas y que, al mismo tiempo, proteja los ecosistemas marinos. Por otra, el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ocupará precisamente de estas cuestiones a finales de noviembre en su 58ª período ordinario de sesiones.

Con ocasión del naufragio del Erika, la autora de este libro se cuestiona la responsabilidad de los operadores privados de transporte marítimo así como qué Estado o Estados han de ser los responsables por los vertidos contaminantes en el mar. Y ello lo hace dividiendo su estudio en dos partes. En la primera, titulada el naufragio del Erika o la búsqueda de la responsabilidad de los operadores privados del transporte marítimo se plantea la responsabilidad y la reparación del daño a cuatro niveles: el primer nivel lo constituye la Convención de Bruselas sobre la responsabilidad civil del naviero (1992), donde se establece que el propietario de la nave es el responsable de la reparación del daño que ésta cause. El estudio sistemático de este primer nivel de responsabilidad se recoge en la primera sección del primer capítulo (págs. 25- 52). En él, tras analizar las disposiciones pertinentes de la Convención sobre la responsabilidad de 1992, relativas al carácter objetivo y limitado de la responsabilidad y las normas relativas al seguro de la responsabilidad como garantía complementaria de la indemnización a las víctimas de la marea negra, se llega a una conclusión un tanto paradójica: la satisfacción y desilusión de las víctimas al mismo tiempo ante el carácter imperativo de la norma pero, sobre todo, por su difícil puesta en práctica. En esta sección se señala, además, brevemente que el tercer nivel de responsabilidad encuentra su fundamento jurídico, precisamente, en la limitación de la responsabilidad del naviero, según la citada Convención de 1992.

El segundo nivel de responsabilidad es el resultado de los posibles recursos ante el Fondo Internacional de Indemnizaciones por Daños de Polución (F.I.P.O.L.), analizado en la sección segunda de este primer capítulo (págs. 53-85). Las indemnizaciones complementarias que otorga este Fondo se alimentan en gran parte de las

aportaciones de las compañías petrolíferas. Tales aportaciones no significan, sin embargo, que la compañía sea la responsable del daño, sino que tan sólo reflejan — que no es poco — su participación en el riesgo que suponen el transporte marítimo de este tipo de mercancías. La cuestión principal de mayor calado e incertidumbre se pone de relieve en la pág. 60 y siguientes cuando se cuestiona cómo se consigue la puesta en práctica de la responsabilidad de estos contribuyentes al Fondo y cómo se puede hacer efectivo el principio de quien contamina paga. La autora sale airosa de la cuestión remitiéndose a la directiva comunitaria de 23 de enero de 2002 aplicable a los daños causados por desastres medioambientales y a los causados por el ejercicio de ciertas actividades profesionales. Para una mayor seguridad jurídica, la directiva recoge en su anexo I un listado preciso de las actividades concernidas.

Como corolario de esta primera parte, en el segundo capítulo (págs. 87-139), se plantea el cuarto nivel de reparación bajo la rúbrica el recurso a los mecanismos de derecho interno: la búsqueda de responsabilidad por el naufragio del Erika. La exigencia moral de la reparación del daño y la decepción ante una indemnización insuficiente, faculta a las víctimas —a juicio de la autora— a poner de manifiesto los eventuales comportamientos negligentes de los Estados con el fin de conseguir una mayor justicia y el castigo del culpable. A nadie se le oculta el obstáculo procesal que esto supone y así se pone de relieve en la sección primera de este capítulo, cuya conclusión se resumiría con estas breves palabras: el Erika y el naufragio de la seguridad marítima. La sección segunda analiza la situación jurídica de las víctimas del naufragio del Erika frente a la maralla de procedimientos jurisdiccionales, como por ejemplo el establecido en la Convención de responsabilidad civil de 1992, en las normas reguladoras del Fondo, las normas civiles, penales y procesales del derecho interno francés, en cuanto a la creación de consorcios activos y pasivos necesarios, o el previsto también en la Convención de Bruselas sobre la competencia y efectos de las sentencias, de 27 de septiembre de 1968, entre otros.

La segunda parte del libro está dedicada al estudio de la responsabilidad internacional de los Estados. Su título, el naufragio del Erika o la huida de la responsabilidad del Estado pretende subrayar la precariedad del cumplimiento del artículo 235 de la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982. En este marco jurídico es donde se desarrollan los dos capítulos de esta parte. El primero de ellos trata de la renuncia del Estado como garante de la seguridad marítima (págs. 145-185). La autora se adentra a analizar la responsabilidad del Estado del pabellón en el caso concreto del Erika y llega a constatar que era un pabellón complicado, incluso casi ficticio por lo que no es de extrañar que las autoridades maltesas difícilmente podían ejercer de facto sus obligaciones sobre seguridad marítima y por tanto tampoco un verdadero control, real, efectivo y técnico de la nave. El segundo y último capítulo de esta parte está dedicado a la situación de las víctimas de la marea negra frente a la inembargable responsabilidad de los Estados (págs. 187-226). A lo largo de estas páginas se pretende imputar responsabilidades a

personas privadas y, en consecuencia, parece extraerse la obligación de éstas de reparar el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de seguridad marítima. Además, las argumentaciones a favor de la actuación de los operadores marítimos como catalizador de los incumplimientos del Estados ponen de manifiesto una idea de fondo: la radical separación o “divorcio”, —como señala el profesor Dupuy— entre el cuidado del medio ambiente y la efectividad de la responsabilidad internacional del Estado en esta materia.

Este estudio sobre las consecuencias jurídicas del naufragio del Erika constata la difícil tarea que supone poner en práctica la responsabilidad de los Estados, la reparación del daño y el restablecimiento de la seguridad marítima. Ante este panorama la autora invita a la reflexión sobre una nueva forma de responsabilidad que haga efectiva la obligación de los Estados de cooperar en la aplicación del derecho internacional ya existente, así como en el ulterior desarrollo internacional de las responsabilidades. En este sentido, Sabrina Robert apuesta por una responsabilidad preventiva que haga a los Estados conscientes de su papel de garantes efectivos de la seguridad marítima.

La obra concluye con un listado exhaustivo de los textos y documentos oficiales más relevantes en la materia y recoge también los distintos informes de expertos sobre el naufragio del Erika. Este apartado termina con un amplio listado bibliográfico totalmente actualizado. Por todo ello, estamos convencidos de que esta obra supone una importante aportación científica y, sobre todo, es una clara llamada de atención a la comunidad internacional para que los Estados se tomen en serio la efectiva protección del medio marino en beneficio de todos.

M<sup>a</sup> Eugenia López-Jacoiste Díaz  
Universidad de Navarra

SOHNLE, Jochen: *Le droit international des ressources en eau douce: solidarité contre souveraineté*, CERIC - La documentation Française, Paris 2002, 608 págs.

---

Necesaria para todos los seres vivos, el agua fue considerada siempre como un don de la naturaleza excluido de cualquier connotación económica. Sin embargo, la confluencia del desarrollo industrial y del crecimiento demográfico del pasado siglo la han convertido en un bien escaso hasta tal punto que ya se ha señalado que la mayor parte de los conflictos bélicos que estallen a lo largo del siglo que ahora comienza tendrán en su origen la falta de recursos naturales, entre los que el agua constituye el más imprescindible. Por ese motivo, la reglamentación —tanto interna como internacional— de la utilización de las aguas dulces se ha convertido en los últimos años en una necesidad ineludible y el contenido de la normativa internacional sirve al